

Artículo 4º Autorízase al Gobierno Nacional a incluir las partidas correspondientes en las Leyes de presupuesto de las vigencias de 1985, 1986 y 1987 para ejecutar las siguientes obras:

- a) Erección de monumentos en honor de don Sebastián de Belalcázar en Pasto, Cali, Popayán, Timaná y Cartagena, si todavía no los hubiere.
b) Reforestación de la cuenca del río Pasto para preservar las fuentes de agua de dicha ciudad así como también de la cuenca hidrográfica de la Cocha situada en el Municipio de Pasto.
c) Reconstrucción de las capillas antiguas de las veredas de Pasto.
d) Pavimentación de las calles de la ciudad de Pasto.
e) Creación de una biblioteca pública municipal con fondos del Presupuesto Nacional en la cual se conservará el archivo histórico de la ciudad.
f) Reimpresión por cuenta del Tesoro Nacional de la Historia de Pasto escrita por el doctor José Rafael Sanudo.

Artículo 5º Esta Ley regirá desde su sanción.

Dada en Bogotá, D. E., a los trece días del mes de diciembre de mil novecientos ochenta y tres.

El Presidente del Senado de la República,

CARLOS HOLGUIN SARDI

El Presidente de la Cámara de Representantes,

CESAR GAVIRIA TRUJILLO

El Secretario General del Senado de la República,

Crispín Villazón de Armas.

El Secretario General de la Cámara de Representantes,
Julio Enrique Olaya Rincón.

República de Colombia. — Gobierno Nacional.

Publíquese y ejecútese.

Bogotá, D. E., 30 de diciembre de 1983.

BELISARIO BETANCUR

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Edgar Gutiérrez Castro.

El Ministro de Educación Nacional,

Rodrigo Escobar Navia.

El Ministro de Obras Públicas y Transporte,

Hernán Beltz Peralta.

LEY 67 DE 1983

(diciembre 30)

por la cual se modifican unas cuotas de fomento, y se crean unos fondos, y se dictan normas para su recaudo y administración.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1º Cuota de Fomento Arrocerero y Cerealista. A partir de la vigencia de la presente ley la cuota de Fomento Arrocerero establecida por la Ley 101 de 1963 será del medio por ciento (0.5%) del precio de venta de cada kilogramo de arroz, y la de Fomento Cerealista, creada por la Ley 51 de 1966, será del tres cuartos por ciento (0.75%) del precio de la venta de cada kilogramo de trigo, cebada, maíz, sorgo y avena de producción nacional.

Artículo 2º Cuota de Fomento Cacaotero. A partir de la vigencia de la presente Ley, la Cuota de Fomento Cacaotero establecida por la Ley 31 de 1965, será del tres por ciento (3%) sobre el precio de venta de cada kilogramo de cacao de producción nacional.

Artículo 3º Fondo Nacional Arrocerero, Cerealista y Cacaotero. El producto de las cuotas de fomento a que se refieren los artículos anteriores se llevarán en una cuenta especial bajo el nombre de Fondo Nacional del Arroz, Fondo Nacional Cerealista y Fondo Nacional del Cacao, según el caso, con destino exclusivo al cumplimiento de los objetivos previstos en la presente Ley.

Artículo 4º Objetivos. Los recursos de cada Fondo se aplicarán a la ejecución o financiamiento de programas de investigación, transferencia de tecnología, comercialización, apoyo a las exportaciones y estabilización de precios en armonía con las metas y políticas trazadas para el sector rural y la actividad agrícola dentro del Plan Nacional de Desarrollo, de manera que se consigan beneficios tanto para los productores como para los consumidores nacionales.

Artículo 5º Recaudo. El recaudo de las Cuotas de Fomento se realizará por las entidades o empresas que compren o procesen cada uno de los productos o por la entidad pública o privada que en cada caso designe el Gobierno Nacional.

Parágrafo. Exclusivamente para los efectos anteriores, el Ministerio de Agricultura señalará semestralmente antes del 30 de junio y 31 de diciembre de cada año, el valor del kilo-

gramo del producto respectivo a nivel nacional o regional, con base en el cual se hará la liquidación de cada cuota de fomento durante el semestre inmediatamente siguiente.

Artículo 6º Presupuesto de Ingresos y Egresos. Los recursos de las Cuotas de Fomento deberán aparecer en el Presupuesto Nacional, pero su percepción se cumple directamente por la entidad administradora.

Los recaudadores de las cuotas mantendrán dichos recursos en cuentas separadas y están obligados a entregarlos a la entidad administradora a más tardar, dentro de los diez (10) días del mes siguiente al de recaudo.

Artículo 7º Plan de Inversiones y Gastos. La entidad administradora de los recursos de cada Fondo elaborará anualmente, antes del 1º de octubre, el Plan de Inversiones y Gastos por programas y proyectos para el año inmediatamente siguiente, el cual solo podrá ejecutarse una vez haya sido aprobado por una comisión especial integrada por los señores Ministros de Agricultura, o su delegado, quien la presidirá, Hacienda o su delegado, Desarrollo o su delegado, el Jefe del Departamento Nacional de Planeación o su delegado, y por tres miembros elegidos por la Junta Directiva de la Asociación correspondiente.

Artículo 8º Administración. El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Agricultura contratará con la Federación Nacional de Arroceros; la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales o la Federación Nacional de Cacaoteros, según el caso, la administración y recaudo de las Cuotas de Fomento Arrocerero, Cerealista y Cacaotero. A falta de cualquiera de estas Asociaciones, podrá encomendarse tales actividades a otra Asociación sin ánimo de lucro lo suficientemente representativa del correspondiente subsector.

En el Contrato Administrativo se dispondrá lo relativo al manejo de los recursos del Fondo, la definición y establecimiento de programas y proyectos, las facultades y prohibiciones de la entidad administradora, el plazo del contrato y demás requisitos y condiciones que se requieran para el cumplimiento de los objetivos legales, así como la contraprestación por la administración y recaudo de cada cuota, cuyo valor podrá ser hasta del diez por ciento (10%) del recaudo anual.

Artículo 9º Vigilancia administrativa. El Ministerio de Agricultura hará el control y seguimiento de los programas y proyectos, para lo cual la entidad administradora de cada fondo deberá rendirle trimestralmente informes en relación con los recursos obtenidos y su inversión.

Con la misma periodicidad, la entidad administradora remitirá a la Tesorería General de la República un informe sobre el monto de los recursos de la Cuota, recaudados en el trimestre anterior, sin perjuicio de que tanto el Ministerio como la Tesorería puedan indagar sobre tales informaciones en los libros y demás documentos que sobre el Fondo guarde la correspondiente entidad administradora.

Artículo 10. Control fiscal. La entidad administradora de cada Fondo rendirá cuentas a la Contraloría General de la República, sobre la inversión de los recursos.

Para el ejercicio del control fiscal referido, la Contraloría adoptará sistemas adecuados que no interfieran la autonomía de la entidad gremial, ni dificulten la ejecución de los programas y proyectos que adelanten.

Artículo 11. Activos de los Fondos. Los activos que se adquieran con los recursos de cada Fondo, deberán incorporarse en la cuenta especial de cada uno de ellos. En cada operación deberá quedar establecido que el bien adquirido hace parte del Fondo de manera que, una vez terminado el contrato de administración con la Asociación respectiva, todos estos bienes, incluyendo los dineros del Fondo que se encuentren en Caja o en Bancos, pasen a ser administrados por la entidad que el Gobierno señale, la cual sola podrá utilizarlos en cumplimiento de los objetivos de protección y fomento previstos en esta Ley.

Artículo 12. Destucción de costos. Para que las personas naturales o jurídicas obligadas a recaudar las cuotas de fomento de que trata esta Ley, tengan derecho a que se les acepte como costos deducibles el valor de las compras durante el respectivo ejercicio gravable, deberán acompañar a sus declaraciones de renta y patrimonio un certificado de paz y salvo por concepto de dicha cuota, expedido por la respectiva entidad administradora de la Cuota.

Artículo 13. Vigencia. La presente Ley rige a partir de la fecha de su promulgación.

Dada en Bogotá, D. E., a los quince días del mes de diciembre de mil novecientos ochenta y tres.

El Presidente del honorable Senado,

CARLOS HOLGUIN SARDI

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

CESAR GAVIRIA TRUJILLO

El Secretario General del honorable Senado,

Crispín Villazón de Armas.

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Julio Enrique Olaya Rincón.

República de Colombia. — Gobierno Nacional.

Publíquese y ejecútese.

Bogotá, D. E., 30 diciembre de 1983.

BELISARIO BETANCUR

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Edgar Gutiérrez Castro.

El Ministro de Agricultura,

Gustavo Castro Guerrero.

LEY 68 DE 1983

(diciembre 30)

por la cual se dictan normas sobre el impuesto al valor CIF de las importaciones y su destinación, se adoptan normas para el Instituto de Fomento Industrial IFI y la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, se conceden unas facultades y se dictan otras disposiciones en materia tributaria y financiera.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo primero. A partir del primero (1º) de enero de mil novecientos ochenta y cuatro (1984), fijase en dos por ciento (2%) el impuesto sobre el valor CIF de las importaciones que se realicen en el país, creado por el artículo 20 del Decreto extraordinario 688 de 1967 y modificado por el artículo 2º del Decreto legislativo 2374 de 1974.

Artículo segundo. A partir del primero (1º) de enero de 1984, todas las entidades del Estado del orden nacional, departamental, municipal, distrital, intendencial y comisarial, serán sujetos pasivos del impuesto al valor CIF de las importaciones a que se refiere el artículo 1º de la presente Ley. Quedan exentas de lo dispuesto en el presente artículo las importaciones de alimentos, cualquiera que sea la entidad pública que los realice, y las importaciones efectuadas por la Empresa Colombiana de Refreos (ECOPETROL).

Artículo tercero. Los importadores consignarán en el Banco de la República el monto del impuesto al cual se refiere el artículo primero de la presente Ley, reducido a moneda legal colombiana y deberán así mismo presentar la constancia de su pago como requisito para obtener la nacionalización de los bienes importados. Ninguna importación podrá ser nacionalizada sin la cancelación del gravamen. El Banco de la República abonará, diariamente, los valores así recaudados en la cuenta corriente bancaria de cada una de las entidades que a continuación se detallan, y en los siguientes porcentajes:

Table with 2 columns: Entidad and Porcentaje. Rows include: Tesorería General de la Nación (20%), Instituto de Fomento Industrial IFI (40%), Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero (40%).

Parágrafo. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley 16 de 1963 y el artículo 1º de la Ley 41 de 1968, autorízase al Gobierno Nacional para aumentar su aporte al capital del Instituto de Fomento Industrial, IFI, hasta la suma de setenta y cinco (75) mil millones de pesos, moneda corriente.

Por el valor de los aportes de capital que haga el Gobierno Nacional al Instituto de Fomento Industrial, de acuerdo con lo establecido en el inciso anterior, este último emitirá acciones a favor de la Nación al valor nominal de \$ 10.000 moneda corriente, cada una.

Artículo cuarto. El Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES, fijará anualmente, con base en la propuesta que le presente el Instituto de Fomento Industrial, IFI, la distribución de los recursos a que se refieren los artículos 1º y 3º de esta Ley entre el otorgamiento de crédito a la industria nacional, la realización de inversiones en empresas industriales y la atención del servicio de la deuda contraída y que contraiga la entidad, para todo lo cual se tendrán en cuenta los compromisos previos de inversión que hayan sido asumidos por el Instituto.

Los fondos destinados a la realización de inversiones en empresas industriales deberán aplicarse según lo determine la Junta Directiva del Instituto, la cual tomará en cuenta los sectores definidos como de interés nacional por parte del Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES, y los compromisos previamente contratados por el Instituto.

Artículo quinto. Sin perjuicio de las facultades contempladas en las normas legales y estatutarias que rigen, el Instituto de Fomento Industrial, IFI, podrá, a partir de la vigencia de la presente Ley, captar ahorro interno mediante la emisión de títulos y suscripción de otros documentos y celebrar contratos de crédito interno, para lo cual se sujetará a lo previsto por las normas legales vigentes sobre la materia, según su naturaleza jurídica y orden administrativo.

Los recursos captados en desarrollo de lo previsto en el presente artículo serán destinados por el Instituto de Fomento Industrial, IFI, al otorgamiento de crédito y a la realización de inversiones en los términos de las normas legales y estatutarias que lo rigen.

Artículo sexto. A partir de la vigencia de la presente Ley el Instituto de Fomento Industrial, IFI, queda facultado para invertir sus excesos de liquidez en operaciones de negociación de cartera, en sus diferentes modalidades, en corporaciones financieras sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria.

Artículo séptimo. Los recursos que le correspondan a la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, en virtud de lo dispuesto en la presente Ley se aplicarán a la capitalización de dicha entidad en los términos de las Leyes 33 de 1971 y 66 de 1982 y al Fondo de Vivienda Rural según lo establecido en la Ley 20 de 1976, y se destinarán a la suscripción y pago de acciones en la entidad a nombre del Gobierno Nacional, al financiamiento o ejecución de programas de construcción o mejoramiento de vivienda rural, a la comercialización de insumos agropecuarios a través de sus almacenes de provisión agrícola o de las entidades que los sustituyan, lo mismo que al establecimiento de una línea de crédito para el financiamiento de la producción de tales insumos y de sus materias primas.

Las sumas que se destinen a la comercialización y financiamiento de insumos y materias primas se manejarán separadamente de los demás recursos de que dispone la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero.

Artículo octavo. El Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES, establecerá anualmente, con base en la solicitud que le presente el Ministerio de Agricultura, las proporciones en que se distribuirán los recursos de la presente Ley en los diferentes programas de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, previstos en el artículo anterior.

Artículo noveno. La Nación asumirá a partir del 1º de enero de 1984, como deuda pública el déficit de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, que la Superintendencia Bancaria certifique con fecha 31 de diciembre de 1983.

Para todos los efectos legales se entenderá cumplida la capitalización de la Caja con la entrega de los títulos de deuda pública con los cuales el Estado asuma el déficit antes señalado.

Autorízase al Gobierno Nacional para que fije las características de los títulos de la deuda pública antes mencionada.

Artículo décimo. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 21 de 1963, a partir de la vigencia de la presente Ley serán computables como encaje de la Caja de Crédito Agrario, los recursos que como inversión forzosa realiza esta entidad en bonos de deuda pública interna, previstos en dicha Ley.

Artículo undécimo. Concédese facultades extraordinarias al Presidente de la República, para que en el término de ciento ochenta (180) días, contados a partir de la sanción de la presente Ley, dicte las normas conducentes a la reestructuración de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, dentro del siguiente marco general:

1º Reorganizar la estructura de la administración central, buscando su simplificación y mayor eficiencia, mediante la creación de áreas especializadas, independientes y autónomas que manejen todos los aspectos relacionados con provisión agrícolas, semillas, fertilizantes, e inmuebles.

2º Reorganizar el nivel de la administración regional, buscando la descentralización en el manejo de los oficios regionales, de tal forma que se le otorgue una amplia autonomía administrativa, financiera, crediticia, comercial y bancaria, dotándolos de la infraestructura administrativa requerida para asumir cabalmente esas funciones.

3º Racionalizar y agrupar las agencias bancarias y de crédito, buscando una cobertura adecuada por parte de la Caja, pero evitando una distribución que genere pérdidas excesivas a la entidad.

Artículo décimosegundo. El Gobierno Nacional incluirá anualmente en el presupuesto nacional las partidas destinadas a financiar el diferencial entre las tasas de colocación de los préstamos de fomento y las tasas de captación de los recursos del Instituto de Fomento Industrial y de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero.

Artículo decimotercero. La destinación y distribución establecidas en el artículo 3º de la presente Ley para los recursos originados por el impuesto al valor CIF de las importaciones será por el término de siete (7) años contados a partir del 1º de enero de mil novecientos ochenta y cuatro (1984), plazo al cabo del cual constituirán ingresos ordinarios de la Nación.

Artículo decimocuarto. La presente Ley rige a partir de la fecha de su sanción salvo lo dispuesto en sus artículos 1º y 2º.

Dada en Bogotá, D. E., a los ... días del mes de ... de mil novecientos ochenta y tres (1983).

El Presidente del Senado de la República,

CARLOS HOLGUIN SARDI

El Presidente de la Cámara de Representantes,

CESAR GAVIRIA TRUJILLO

El Secretario General del Senado de la República,

Crispín Villazón de Armas.

El Secretario General de la Cámara de Representantes,

Julio Enrique Olaya Rincón.

República de Colombia.— Gobierno Nacional.

Publíquese y ejecútese.

Bogotá, D. E., 30 de diciembre de 1983.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Edgar Gutiérrez Castro.

El Ministro de Agricultura,

Gustavo Castro Guerrero.

El Ministro de Desarrollo Económico,

Rodrigo Marín Bernal.

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resoluciones Ejecutivas

RESOLUCION EJECUTIVA NUMERO 0235 DE 1983

(diciembre 26)

por la cual se niega un cambio de radicación de un proceso penal.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO:

Que el doctor Ricardo Charry Iregui, Juez Tercero Superior de Villavicencio, solicitó al Gobierno Nacional el cambio de radicación del proceso que en su despacho se adelanta contra Antonio José Ocampo Leyva, por el delito de homicidio.

Que el doctor Ricardo Charry Iregui, fundamentó su petición, en la información de la señora Carmen Zoraida León Velásquez, jurado en la causa, y en la petición del Fiscal del Juzgado, manifestando la existencia de circunstancias que harían prever que las personas intervinientes en el juzgamiento, no administrarían justicia rectamente.

Que la Oficina Jurídica del Ministerio de Justicia remitió la solicitud con sus antecedentes a la honorable Corte Suprema de Justicia, para que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 del Código de Procedimiento Penal, emitiera el concepto correspondiente.

Que la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, mediante acta número 95 del 10 de noviembre de 1983, conceptuó desfavorablemente al cambio de radicación so-

licitado, en razón de que los hechos ocurridos, aun cuando no son normales, "no constituyen sin embargo, motivos valederos para fundar un cambio de radicación, pues en primer lugar, no tienen la suficiente entidad como para afirmar que atentan contra la imparcialidad del juzgamiento y, en segundo lugar, porque ellos también pueden ocurrir en cualquier lugar a donde pueda ser trasladado el proceso".

Que el Gobierno Nacional debe obrar de acuerdo con el concepto emitido por la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

Artículo primero. Niegase el cambio de radicación del proceso penal que por el delito de homicidio, se adelanta en el Juzgado Tercero Superior de Villavicencio, contra el señor Antonio José Ocampo Leyva.

Artículo segundo. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. E., a 26 de diciembre de 1983.

El Ministro de Justicia,

BELISARIO BETANCUR

Rodrigo Lara Bonilla.

Resoluciones

RESOLUCION NUMERO 6339 DE 1983

(noviembre 3)

por la cual se reconoce una personería jurídica.

El Ministro de Justicia, en ejercicio de la atribución que le confiere el Decreto 576 de 1974, y

CONSIDERANDO:

Que los Señores Libardo Rubio González y Eduardo Salamanca Vargas, en su carácter de Presidente y Secretario, respectivamente, de la "Asociación de Servicios Sociales de San Juan de Rioseco, con domicilio en el Municipio de San Juan de Rioseco (Cundinamarca), solicitan a este Ministerio se reconozca personería jurídica a dicha asociación;

Que los peticionarios acompañan a su solicitud copias debidamente autenticadas del acta en la cual consta la organización formal de la entidad, el nombramiento de dignatarios y la adopción de los estatutos que la van a regir, reglamentos que allegan igualmente en copias autenticadas y en los cuales se consignan como objetivos primordiales de la asociación, entre otros, desarrollar una política tendiente a solucionar los problemas sociales que confronta la comunidad y en especial adquirir por cualquier medio lícito lotes de terreno en el Municipio de San Juan de Rioseco, para que cada uno de los asociados que conforman la entidad, adquiera su vivienda propia por sistemas de autoconstrucción, y quienes ya la tienen puedan mejorarla; incrementar entre los miembros de la asociación la solidaridad y el apoyo irrestricto a los propósitos de la entidad; y adelantar investigaciones sociales, a fin de tener conocimiento de los problemas de la colectividad, con miras a darles solución acertada, etc.;

Que la Gobernación de Cundinamarca, por cuyo conducto se formuló la petición de que se trata, emitió concepto favorable al reconocimiento de personería solicitada y en el mismo sentido se pronunció la Superintendencia Bancaria de conformidad con lo previsto en el Decreto 914 de 1983;

Que la organización de la entidad mencionada se ajusta a las disposiciones del Título XXXVI, Libro Primero del Código Civil y la documentación allegada cumple los requisitos exigidos al efecto por el Decreto 1510 de 1944;

Que por las razones expuestas es procedente habilitar a la asociación en referencia para ejercer derechos y contraer obligaciones civiles,

RESUELVE:

Artículo 1º Reconocer personería jurídica a la entidad denominada "Asociación de Servicios Sociales de San Juan de Rioseco", con domicilio en el Municipio de San Juan de Rioseco (Cundinamarca).

Parágrafo. Es entendido que para los planes de vivienda que la asociación se propone adelantar y para la recepción de dineros con destino a los mismos, deberá obtenerse la correspondiente autorización de la Superintendencia Bancaria, de conformidad con lo previsto en el Decreto 1742 de 1981 y la Resolución de la citada Superintendencia número 3811 del mismo año.

Artículo 2º Aprobar los estatutos de la asociación antes mencionada y ordenar la inscripción de su junta directiva, cuyo Presidente llevará la representación legal de la entidad.

Artículo 3º La presente Resolución deberá ser publicada en el **Diario Oficial** por cuenta de los interesados y regirá quince (15) días después de tal publicación (artículo 4º, Decreto 1326 de 1922). Los interesados harán llegar un ejemplar de dicho diario a la Oficina Jurídica de este Ministerio.

Comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. E., a 3 de noviembre de 1983.

El Ministro de Justicia,

Rodrigo Lara Bonilla.

El Secretario General,

Rodrigo Muñoz Calderón.

Es copia auténtica.

El Abogado Oficina Jurídica,

Julio C. Morales M.

Se anularon estampillas por valor de \$ 800, Decreto 3212 de 1979.

Almacén de Publicaciones. Recibo 211266. Derechos \$ 1.560. 18-XI-83 — 1727 — Elvira G. de Gutiérrez.

RESOLUCION NUMERO 7220 DE 1983

(diciembre 5)

por la cual se concede una personería jurídica.

El Ministro de Justicia, en ejercicio de la atribución que le confiere el Decreto 576 de 1974, y

CONSIDERANDO:

Que el señor Fernando Enrique Montoya Gallo, identificado con la cédula de ciudadanía número 2394919 de Villahermosa, Tolima, actuando en calidad de Presidente de la Asociación de Padres de Familia del Colegio Distrital Luis López de Mesa, solicitó a este Ministerio el reconocimiento de personería jurídica a dicha entidad;

Que el peticionario acompaña a la solicitud, copia auténtica de las actas en donde consta la organización formal de la entidad, la elección de sus dignatarios y la aprobación de los estatutos que la van a regir, en los cuales se establece que es una entidad sin ánimo de lucro con los siguientes objetivos: impulsar la educación familiar y escolar, participar en la integración de la comunidad educativa compuesta por educandos, educadores y padres de familia, a partir de la correcta educación familiar, contribuir en el buen rendimiento académico, disciplinario de sus hijos, estableciendo verdaderos lazos de comprensión, cooperación con los educandos, entre otros;

Que la Gobernación de Cundinamarca, por cuyo conducto se formuló la petición, emitió concepto favorable al reconocimiento de la personería jurídica solicitada, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1510 de 1944, y el Ministerio de Educación Nacional dio concepto igualmente favorable, según lo ordenado en el Decreto 1625 de 1973;

Que la organización de la entidad mencionada se ajusta a las disposiciones contenidas en el Título XXXVI, Libro Primero del Código Civil y demás normas concordantes;

Que por las razones expuestas es procedente habilitar a la Asociación en referencia para ejercer derechos contraer obligaciones civiles,

RESUELVE:

Artículo primero. Reconocer personería jurídica a la Asociación de Padres de Familia del Colegio Distrital Luis López de Mesa, con domicilio en la ciudad de Bogotá.

Artículo segundo. Aprobar los estatutos de la citada Asociación y ordenar la inscripción de su Junta Directiva, y del Presidente quien llevará la representación legal.

Artículo tercero. La presente Resolución deberá ser publicada en el **Diario Oficial**, por cuenta de los interesados, y entrará a regir quince (15) días después de tal publicación, de acuerdo con lo previsto por el artículo 4º del Decreto 1326 de 1922. Los interesados harán llegar un ejemplar de dicho diario a la Oficina Jurídica de este Ministerio.

Comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. E., a 5 de diciembre de 1983.

El Ministro de Justicia,

Rodrigo Lara Bonilla.

El Secretario General,

Rodrigo Muñoz Calderón.

Es copia auténtica.

El Abogado Oficina Jurídica,

Jorge Luis Gutiérrez.

Se anulan estampillas por valor de \$ 800.00, Decreto 3212 de 1979.

Almacén de Publicaciones. Recibo 212921. Derechos \$ 1.560. 9-XII-83 — 1766 — Elvira G. de Gutiérrez.

RESOLUCION NUMERO 6924 DE 1983

(noviembre 21)

por la cual se concede una personería jurídica.

El Ministro de Justicia, en ejercicio de la atribución que le confiere el Decreto 576 de 1974, y

CONSIDERANDO:

Que Priscila Welton, identificada con cédula de ciudadanía número 41576701 de Bogotá, actuando en calidad de Director de la Fundación Ballet Nacional, solicitó a este Ministerio el reconocimiento de personería jurídica a dicha entidad;

Que la peticionaria acompaña a la solicitud, además de la certificación de la entidad bancaria en donde se encuentran depositados los dineros de la fundación, copia auténtica de las actas en donde consta la organización formal de la entidad, la elección de sus dignatarios y la aprobación de los estatutos que la van a regir, en los cuales se establece que es una entidad sin ánimo de lucro con los siguientes objetivos: Conseguir los altos fines de la cultura mediante enseñanza, promoción, fomento y difusión de la danza clásica en Colombia, propiciando su arte, promoviendo en todas sus manifestaciones, y a través de los medios de difusión adecuados, tales como presentaciones en escenarios públicos y privados, publicaciones, conferencias;

Que la Gobernación de Cundinamarca, por cuyo conducto se formuló la petición, emitió concepto favorable al reconocimiento de la personería jurídica solicitada, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1510 de 1944;

Que la organización de la entidad mencionada se ajusta a las disposiciones contenidas en el Título XXXVI, Libro Primero del Código Civil, y demás normas concordantes;

Que por las razones expuestas es procedente habilitar a la fundación en referencia para ejercer derechos y contraer obligaciones civiles,

RESUELVE:

Artículo 1º Reconocer personería jurídica a la Fundación Ballet Nacional, con domicilio en la ciudad de Bogotá.

Artículo 2º Aprobar los estatutos de la citada fundación, ordenar la inscripción de su junta directiva, y del Director, quien llevará la representación legal.

Artículo 3º La presente Resolución deberá ser publicada en el **Diario Oficial** por cuenta de los interesados y entrará a regir quince (15) días después de tal publicación, de conformidad con lo establecido por el artículo 4º del Decreto 1326 de 1922. Los interesados harán llegar un ejemplar de dicho diario a la Oficina Jurídica de este Ministerio.